CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL

SENADO

COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN VAN-HALEN ACEDO

celebrada el miércoles, 29 de mayo de 2002

ORDEN DEL DÍA:

- Dictaminar el Proyecto de ley orgánica de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. (Número de Expediente 621/000065).
- Aprobar el proyecto de informe de la Ponencia de estudio sobre la situación de las enseñanzas científicas en la educación secundaria. (Número de expediente 543/000012).
- Votación de la moción del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de *Convergència i Unió*, por la que se insta al Gobierno a la emisión de un sello conmemorativo del octavo centenario del inicio de las obras de construcción de la Seo Vieja, en Lleida. (Número de expediente 661/000181).

Corrección de errores del «Diario de Sesiones» número 250.

Se abre la sesión a las diez horas y cuarenta y cinco minutos.

El señor PRESIDENTE: Buenos días. Se abre la sesión. Ruego, señorías, me disculpen por haber empezado con quince minutos de retraso, pero es que el Presidente

se ha desorientado por los procelosos corredores del Palacio y contrapalacio del Senado identificando la sala de reuniones.

Entramos en el punto primero del orden del día: Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. ¿Alguna observación al acta? (*Pausa.*)

Queda aprobada.

El señor VARELA I SERRA: Señor Presidente, pido la palabra.

El señor PRESIDENTE: Senador Varela, tiene la palabra.

El señor VARELA I SERRA: Yo quisiera, en primer lugar, solicitar de la Comisión y de la Presidencia alterar el orden del día en el sentido de aplazar el punto sobre el debate y aprobación del Informe de la Ponencia sobre la situación de las enseñanzas científicas en la educación secundaria y, en segundo lugar, incluir en el orden del día la votación de aquella moción que presenté hace tiempo por la que se instaba al Gobierno a la emisión de un sello conmemorativo del octavo centenario del inicio de las obras de construcción de la Seo Vieja, en Lleida.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: ¿Algún portavoz quiere intervenir? (*Pausa.*)

El Senador Barahona tiene la palabra.

El señor BARAHONA HORTELANO: Muchas gracias, señor Presidente.

Nuestro grupo acepta aplazar el debate del Informe de la Ponencia sobre la situación de las enseñanzas científicas y también incorporar la votación de la moción a la que se ha referido el señor Varela.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Barahona.

¿Algún otro portavoz quiere intervenir? (*Pausa.*)

¿Entendemos que estamos de acuerdo? (*Pausa.*)

Queda aplazado el segundo punto del orden del día, es decir, la aprobación del Informe de la Ponencia de estudio sobre la situación de las enseñanzas científicas en la educación secundaria.

Por tanto, el segundo punto del orden del día será precisamente la votación —porque el debate ya se había realizado— de la moción en la que el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de *Convergència i Unió* proponía instar al Gobierno, en este caso al organismo Correos y Telégrafos, para que produzca la edición de un sello con motivo del octavo centenario de la Seo Vieja, en Lleida.

— DICTAMINAR EL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE LAS CUALIFICACIONES Y DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL (621/000065).

El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate del dictamen del proyecto de ley orgánica de las cualificaciones y de la formación profesional.

A este proyecto de ley se han presentado siete propuestas de veto; en primer lugar, vamos a pasar a debatir la propuesta de veto número 1, presentada por don Manuel Cámara Fernández y don José Cabrero Palomares.

Para su defensa, tiene la palabra la senadora De Boneta.

La señora DE BONETA Y PIEDRA: Gracias, señor Presidente.

Señorías, las tres primeras propuestas de veto han sido presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto y, si el señor Presidente me lo permite, voy a defender todas ellas en una sola intervención.

En este sentido, les diré que el veto número 1, de los senadores de Izquierda Unida don Manuel Cámara y don José Cabrero, pertenecientes al Grupo Mixto, así como el veto número 2, del senador del BNG don Anxo Manuel Quintana, perteneciente también al Grupo Mixto, se dan por defendidos.

Muy brevemente voy a pasar a exponer algunas de las razones por las que, en nombre de Eusko Alkartasuna, esta senadora del Grupo Parlamentario Mixto y portavoz en la Comisión de Educación plantea el veto número 4.

El señor PRESIDENTE: Perdón por la interrupción, Senadora De Boneta, aunque ya lo hemos comentado con anterioridad, convendría que constase en acta que las votaciones no tendrán lugar antes de las doce de la mañana.

Puede continuar, Senadora de Boneta.

La señora DE BONETA Y PIEDRA: Gracias, señor Presidente, queda perdonado.

Paso a exponer brevemente las razones por las cuales entiendo que este proyecto de ley orgánica de las cualificaciones y de la formación profesional no es un buen proyecto ni va a conseguir los objetivos perseguidos.

Desde mi punto de vista, debería plantearse un sistema de cualificaciones y de la formación profesional adaptado al entorno europeo y, sobre todo, útil para dar respuesta a uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, intrínsecamente ligado a la dignidad de las personas, el derecho al trabajo. Me temo que con este proyecto de ley no se va a conseguir el objetivo de preparar a las personas suficientemente bien para llegar a obtener, dentro de sus aspiraciones, de los conocimientos y de la orientación que se haya querido alcanzar a través de esa formación profesional un puesto de trabajo digno, porque esta ley no está adaptada a las necesidades de las personas ni de las demandas del propio mercado de trabajo.

Considero que el motivo que acabo exponer es suficiente para dar un buen repaso al proyecto de ley e intentar modificarlo de forma drástica. Por ello, los representantes de Eusko Alkartasuna en el Congreso de los Diputados presentaron una enmienda de totalidad con proyecto alternativo; sin embargo, como no es éste el trámite que se sigue en el Senado, hemos presentado esta enmienda de veto, además de diversas enmiendas parciales, con el fin de intentar cambiar el proyecto o dar una nueva orientación al mismo.

Desde mi punto de vista, además de aceptar nuestra propuesta de cambio de orientación del proyecto, también podrían aceptarse algunas cuestiones puntuales que lo mejorarían notablemente; sin embargo, pensamos que es un proyecto difícil de parchear puesto que presenta problemas de raíz.

La mejora de las cualificaciones de la población adulta y juvenil se puede conseguir en la medida en que las cualificaciones profesionales se configuren como los referentes a lograr por las personas en el desempeño de su actividad profesional.

La transparencia del mercado de trabajo y del ajuste de la oferta y de la demanda de empleo permitirá facilitar la calificación y la cualificación de los demandantes de empleo y mejorar los servicios de orientación e información, que es de donde surgen los problemas en muchas ocasiones, ya que no existen, no son buenos o no profundizan lo suficiente en los servicios de orientación e información profesional, con vistas a facilitar la ayuda necesaria a la hora de tomar las decisiones correspondientes por los alumnos y alumnas que encaminan sus pasos hacia la formación profesional. Por ello, el incremento de la calidad y coherencia del sistema de formación profesional debe conseguirse gracias a esa oferta formativa adecuada a las necesidades de cualificación de los diferentes colectivos.

En este sentido, entiendo que el sistema de cualificaciones y formación profesional es un objetivo básico del programa de formación profesional y que se enlaza, además, con otros tres objetivos: desarrollar un sistema integrado de información y orientación, cuestión que falla de raíz; garantizar la calidad de la formación profesional y programar la oferta a grupos con necesidades específicas.

Estos retos requieren un sistema de cualificaciones dotado de unos elementos de carácter estructural propio, sobre los que tiene que descansar la validez y fiabilidad del propio sistema.

En este sentido creemos que es necesario ese catálogo de cualificaciones, al que he aludido tantas veces, un sistema de títulos de formación profesional ligado a ese catálogo, un catálogo integrado modular de formación asociado al sistema de calificaciones —que actuará como marco orientador y de referencia de las acciones o formación— y una red de centros formativos que oferten este catálogo, organizado en paquetes modulares apropiados a las necesidades de la población activa, tanto ocupada como desocupada, y a la población escolar.

Creemos que el proyecto no aborda —a pesar de aludir a un sistema de atención global— la formación profesional, el sistema de cualificaciones de modo integrado. No da respuesta a algunos de los requerimientos que en la propia exposición de motivos se plantean como indispensables. No se acerca, aunque plantee esa vocación, a la filosofía normativa y práctica de la formación profesional en los países de nuestro entorno, en especial a la Unión Europea, y no profundiza en los instrumentos que favorezcan el prestigio de la formación profesional.

Señor Presidente, señorías, creo que ésta es una cuestión fundamental a la hora de estudiar y valorar el proyecto. Se ha dicho por activa y por pasiva que la formación profesional hay que prestigiarla pues carece de prestigio. El problema —entre comillas— en relación con las manifestaciones de los representantes del Grupo Parlamentario Popular, de la señora Ministra y altos cargos del Ministerio, cuando insisten en que el problema de la formación profesional es un problema de prestigio es que no se fijan

objetivos, y esto enlaza con el próximo debate en esta Cámara de la ley de calidad de la enseñanza, porque habría que aumentar el número de estudiantes dirigidos a la formación profesional ya que el porcentaje en el Estado español es mucho menor que en el entorno europeo, y habría que preguntarse por qué pasa esto. Y pasa esto precisamente porque la calidad y el prestigio de la formación no son buenos.

Ahora bien, si por calidad entendemos que se diversifiquen mucho antes las salidas hacia esa formación, nos encontraríamos con que estamos haciendo una formación profesional —y así lo está dibujando el proyecto— para personas de segundo nivel. No estamos contemplando la formación profesional como una elección libre e interesante para cualquier persona y estamos ayudando a su propio desprestigio, porque estamos dirigiendo a las personas hacia una formación que además no cubre las necesidades específicas mucho antes de lo que hasta ahora se había planteado desde la legislación y normativa educativa actual.

Este extremo es muy importante y es una clara contradicción cuando ustedes hablan de calidad, de reforma en la formación profesional y cuando este proyecto habla de adaptar la formación profesional al entorno europeo.

En este sentido, tengo que decir que el paso de este proyecto por el Congreso no ha dado ningún resultado —imagino que estos argumentos se habrán repetido muchas veces—, puesto que todo lo que se ha conseguido es cambiar el orden del título y la referencia al título en cada uno de los artículos del proyecto. Es decir, de una ley que se llamaba de formación profesional y cualificaciones se ha pasado a un proyecto de ley orgánica de cualificaciones y de formación profesional. Ésa ha sido toda la gran aportación y la apertura a las enmiendas a la que ustedes han estado dispuestos cuando estoy convencida de que todos los grupos parlamentarios las han presentado con su mejor voluntad para perfeccionar la calidad, la formación profesional y ayudar a que el sistema educativo en su conjunto sea mejor.

Pues bien, todo lo que se ha aceptado ha sido ese importante cambio en el título del proyecto de ley —cambio que afecta a todos los artículos y a la propia exposición de motivos—, y dudo de que en este trámite vayan a ser ustedes más receptivos. Sin embargo, espero que entiendan que no podemos cejar en nuestro empeño de mejorar la formación profesional y por estas razones exponemos estas cuestiones.

He dejado para el último lugar una cuestión para mí muy importante, que es el respeto a las competencias de las comunidades autónomas en la materia.

La vinculación de este proyecto a un presunto acercamiento a las políticas públicas de la Unión Europea en la materia una vez más le está sirviendo al Gobierno del Partido Popular de excusa para recuperar competencias, por la vía de hecho —y de derecho si se aprobase este proyecto— que habían sido asumidas por las comunidades autónomas. En el caso de la Comunidad Autónoma Vasca, de la cual soy senadora designada por el Parlamento vasco, debo decir que el Estatuto de Autonomía del País Vasco en su ar-

título 16 contiene una particularidad o especialidad que no se contempla en ninguno de los otros Estatutos de Autonomía, puesto que la enseñanza en todos sus niveles, grados y extensión se atribuye a las comunidades autónomas. Además, en el caso de nuestro Estatuto de Autonomía no podemos olvidar que la educación viene vinculada a la disposición adicional primera de la Constitución, que ampara y respeta los derechos históricos. Algo debe querer decir esto en relación con las competencias exclusivas de las comunidades autónomas.

En el caso de la comunidad autónoma, nos parece que el agravio que representa este proyecto de ley es aun mayor, puesto que no se recatan en sus declaraciones públicas —incluso de tipo divulgativo, como las que ayer se oían en el programa «El debate» de la Segunda Cadena de Televisión Española— al hablar de competencias transferidas, calificándolas de meras competencias de gestión.

Señorías, yo no admito que se refieran a las competencias —ni a éstas ni a otras— como meras competencias de gestión, puesto que éstas son competencias exclusivas. En el caso concreto de la Comunidad Autónoma Vasca, cuando hablamos de competencias de gestión nos referimos, según el Estatuto, por ejemplo, a las del régimen económico de la Seguridad Social, pero no a éstas, que son normativas en todos los niveles y al amparo, insisto, de la disposición adicional primera de la Constitución.

Dicho esto, con este veto Eusko Alkartasuna se opone a este proyecto de ley. Debo insistir en que el veto no sólo se plantea en función de esta última cuestión, que no es baladí, pues para mí es muy importante, y he de señalar que no se pueden hacer críticas a una ley anterior, a la LOGSE —termino, señor Presidente— ni a ninguna otra norma cuando no se han puesto los medios para cumplir lo establecido en la misma; y cuando digo los medios me refiero a los recursos materiales, humanos, etcétera.

El problema de la LOGSE es de financiación, sin perjuicio de que cuando una ley lleva años en vigor debe ser reformada o analizada para comprobar qué asuntos no se adaptan a las necesidades sociales del momento.

Este proyecto nos parece raquítrico y poco adecuado; además, se queda a medio camino de lo que se pone en práctica en la Unión Europea y representa igualmente cierta vuelta a la situación que teníamos con la Ley General de Educación del año 1970 e, insisto, tampoco prevé la financiación necesaria, con lo cual dudo mucho que ni siquiera su propio proyecto se pueda poner en marcha.

Nada más. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora De Boneta.

Para la defensa de la propuesta de veto número 3, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el senador Bildarratz.

El señor BILDARRATZ SORRON: Gracias, señor Presidente.

Señorías, buenos días. La postura de nuestro grupo parlamentario con respecto al proyecto de ley que estamos tratando en este momento confirma, en primer lugar, la necesidad existente de reformular en un sentido integral el

importante conjunto de políticas públicas sobre el que se proyecta la formación profesional.

Cada vez resulta más palpable la idea de que todos los aspectos relacionados con la cualificación de los recursos humanos y con la capacidad de valorizarlos permanentemente influyen sobre la eficacia y la competitividad de las economías y de sus estructuras productivas.

Asimismo, también estimamos que se ha perdido una oportunidad de oro para hacerlo de una manera ordenada y con la participación de todos los afectados por este proyecto de ley porque, tal como he apuntado, lo mismo que es necesario valorar todos estos aspectos, es decir, actuar desde una perspectiva valorativa, siendo imprescindible, a todas luces, no hay duda de que lo debiéramos hacer de una manera positiva, y entiendo que el proceso que está siguiendo el presente proyecto no va en la línea apuntada.

La reflexión que hoy voy a realizar con relación a la justificación de nuestro veto al presente proyecto de ley se basa en un esquema de cuatro puntos: el primero, como no podía ser de otra manera, es de ámbito competencial, y utilizo la expresión —entrecomillada, por supuesto— porque es recurrente la opción que el Partido que sustenta al Gobierno mantiene una y otra vez tanto con este proyecto de ley como con otros ya pasados y parece que también con otros proyectos en cuyos primeros textos se comienza a trabajar, donde el Partido del Gobierno traspasa una y otra vez el ámbito competencial de las diferentes administraciones.

El Gobierno del Partido Popular ha optado por una línea de trabajo que no nos parece la adecuada, no respetando el ordenamiento jurídico con el que los ciudadanos nos hemos dotado, tal como se puede percibir continuamente en el desarrollo del presente proyecto.

Estamos ante un texto que comprende planteamientos involucionistas desde el punto de vista de aplicación del régimen jurídico constitucional del reparto competencial entre distintos poderes públicos. Lo apreciamos en demasía en relación con la ordenación del sistema educativo, actualizando las posiciones más regresivas de todos aquellos debates de corte competencial que se han ido cerrando con cierto consenso en el proceso de construcción del sistema educativo vigente.

La primera pauta a considerar está comprendida en el propio artículo 149.1.30 de la Constitución Española que reserva a la competencia del Estado —y entrecomillo— la regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en la materia.

Por su parte, el artículo 16 del Estatuto de Autonomía de Gernika dispone —y vuelvo a entrecomillar— que en aplicación de lo dispuesto en la disposición adicional primera de la Constitución, es de la competencia de la Comunidad Autónoma del País Vasco la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, sin perjuicio del artículo 27 de la Constitución y Leyes Orgánicas que lo desarrollen, de las facultades que atribuye al Estado el artículo 149.1.30ª de la misma y de la alta inspección necesaria para su cumplimiento y garantía.

Las conclusiones más relevantes que la doctrina, los propios debates constituyentes y la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional han ido consolidando apuntan lo siguiente: El artículo 27 de la Constitución no toma partido alguno en el régimen de distribución de competencias, de modo que las referencias a los poderes públicos que contiene lo son también a las comunidades autónomas. El Estado no puede crear y sostener centros docentes de titularidad en el ámbito de las comunidades autónomas que tengan asumidas competencias en la materia. Además, la competencia estatal sobre regulación de requisitos para la obtención, expedición y homologación de títulos tiene un contenido concreto y referido fundamentalmente a la fijación de unos contenidos mínimos comunes de los planes de estudio; la determinación del modelo y procedimiento de expedición de los títulos; el reconocimiento oficial y denominación de los mismos y, en definitiva, una ordenación general que posibilite el intercambio profesional y académico en todo el territorio del Estado.

No hay duda alguna de que el presente proyecto traspasa con amplitud las competencias propias del Estado en detrimento de las propias de las comunidades autónomas.

En otro orden de cosas, y como segundo eje de mi exposición y desarrollando también el ámbito competencial, el presente proyecto refleja el hecho de que subyace la idea de extender el modelo gestor centralizado de la FP, la formación profesional de ámbito laboral, al mundo de la formación profesional reglada mediante una compleja mezcla y aprovechamiento al límite de las posiciones competenciales que ostenta el Estado en cada materia; aunque tampoco tan centralizado después de la última sentencia del Tribunal Constitucional que acredita que la gestión de los fondos para la formación continua se traspase a las comunidades autónomas con competencia en la materia.

De todas maneras, estamos de acuerdo en que la ordenación de la formación profesional no debe tratar sólo de integrar los efectos del reconocimiento jurídico de ámbitos formativos dispersos sino también las necesidades del tejido productivo y las necesidades sociales y económicas de cada ámbito territorial haciendo, en definitiva, que la definición de las cualificaciones profesionales sea el resultado de un proceso participativo en el que tomen parte las autoridades y los agentes sociales de su ámbito.

Para ello, resulta clave entender que la labor gestora de base que valoriza los recursos humanos y las necesidades y ofertas formativas para todos y a lo largo de toda la vida no puede hacerse desde instancias centrales de la Administración General del Estado, como pretende este proyecto de ley, sino que corresponde constitucional y estatutariamente a las comunidades autónomas.

Como tercer eje del planteamiento que estoy realizando en el día de hoy, es mi obligación manifestar que el texto presentado tiene grandes lagunas; planteamiento que realizo comprobando que el presente proyecto ni siquiera propone los objetivos académicos de la formación profesional ni tampoco aborda cuestiones curriculares pendientes de resolución; igualmente, trata diversos temas que afectan directamente a los centros desde un punto de vista alejado de la realidad de los mismos.

Señorías, ¿cómo entienden que estemos tratando un proyecto de ley sobre la formación profesional, que estemos trabajando en un aspecto integrador de las situaciones actuales y que el texto que estamos analizando no dibuje siquiera los objetivos académicos a desarrollar?

¿Es normal un planteamiento similar, señorías? El texto que hoy se trae a esta Comisión es tan amplio que se convierte en vago, y ni siquiera tiene una estructura educativa básica, sabiendo que la realidad educativa, sociocultural y sociolaboral es muy diferente en el conjunto de la formación profesional del Estado.

Por último, y cuarto eje de mi exposición, quiero realizar una breve reflexión sobre la relación que este proyecto no tiene con el ámbito europeo. En pleno desarrollo de la sociedad de la comunicación, en un mundo global como en el que nos estamos moviendo hoy, el único ámbito territorial que ha sido ampliamente desarrollado es el que ustedes llaman nacional. No hay un concepto que aparezca tantas veces en este proyecto como éste. Ustedes verán, pero la sociedad, el mundo moderno, no va en esa línea. Europa es un mercado de oportunidades para nosotros, no podemos obviarlo. Nuestra única obsesión tiene que ser cómo integrarnos en él, con la mayor garantía de éxito, para que las personas que se formen dentro del ámbito estatal no tengan ningún tipo de problema para acudir a ese mercado de oportunidades. Sin embargo, creo que en este proyecto no se mira más allá de los Pirineos, y en mi opinión eso es un gran error.

El País Vasco tiene una amplia tradición en materia de Formación Profesional, y esa experiencia la acreditan unos centros de gran calidad, y reconocidos internacionalmente, para los que este proyecto no dice nada. Pero nuestros centros quieren mirar hacia el futuro, no hacia atrás.

Tras la justificación del veto presentado por nuestro grupo parlamentario, deseo concluir diciendo que consideramos razonable que entre en vigor una ley básica flexible, pero ésta se debe consensuar con las comunidades autónomas y los agentes sociales. Sin embargo, ustedes no la han planteado de esa forma, y ése va a ser el verdadero error de esta ley.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bildarratz.

Para la defensa de la propuesta de veto número 5, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el señor Sabaté.

El señor SABATÉ BORRÀS: Gracias, señor Presidente.

Nuestro grupo parlamentario presenta este veto al proyecto de ley orgánica de las cualificaciones y de la Formación Profesional pese a compartir el criterio de la necesidad de que exista una ley que impulse y desarrolle la Formación Profesional como uno de los pilares de nuestro sistema educativo. Y lo hacemos, porque consideramos que el proyecto que hoy se nos presenta para su debate y aprobación no responde a las necesidades de nuestro país en estos momentos.

Basamos la justificación de nuestro veto en dos consideraciones fundamentales. La primera se refiere a que, una vez más, estamos ante un intento de uniformización, del Grupo Parlamentario Popular y, por tanto, también del Gobierno. Sin duda, ésta es una de sus preocupaciones fundamentales porque ustedes deben entender el Estado de las Autonomías como dispersión, como barullo —si me permiten utilizar esta expresión coloquial que emplean a menudo—, y por tanto asistimos a esos intentos de reuniformizar, de controlar, de centralizar aspectos legislativos que ya habían tenido una importante descentralización.

Lo que se pretende en definitiva es limitar las competencias de las comunidades autónomas, muchas de las cuales ya han asumido competencias plenas en materia educativa, disfrutando así de un amplio marco competencial. Comparto, pues, los criterios de los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra respecto de que las competencias de las comunidades autónomas se verían gravemente afectadas por el presente proyecto de ley.

La segunda consideración que justifica nuestro veto es el hecho de que el sistema de Formación Profesional vigente en estos momentos, regulado por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, la LOGSE, prevé un modelo de formación profesional basado en una amplia flexibilidad en lo que se refiere a las cualificaciones, las titulaciones y la oferta educativa —sobre todo, de la Formación Profesional reglada— que se adapte a las necesidades del mercado, de las empresas, del entorno socioeconómico. Pero este intento uniformizador va en sentido contrario, eliminando cualquier tipo de flexibilidad. Sin embargo, es absolutamente necesario que la Formación Profesional se vaya adaptando progresivamente a las necesidades de una sociedad cambiante, como es la nuestra, dejando al propio sistema educativo, es decir a los centros, en colaboración con las instituciones —sobre todo las instituciones locales, que son las más próximas—, que puedan ir adaptando la oferta a las necesidades que se vayan produciendo y manifestando el mercado laboral. Por ello, creemos que la voluntad por parte del Grupo Popular y del Gobierno de uniformizar, de controlar, de eliminar esta flexibilidad que en principio tiene el actual marco normativo establecido por la LOGSE es completamente negativa y supone una vez más un intento de involución respecto de lo que se había conseguido con la ley citada.

Ésa es la razón de que nuestro grupo entienda que este proyecto de ley debería modificarse en su totalidad, y de ahí que hayamos presentado esta propuesta de veto.

Gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Sabaté.

Para la defensa de la propuesta de veto número 6, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Varela.

El señor VARELA I SERRA: Gracias, señor Presidente.

Nuestro grupo presenta este veto porque, si bien está de acuerdo en la necesidad de coordinar adecuadamente la

Formación Profesional en sus tres actuales modalidades: formación reglada, formación continua y formación ocupacional, no lo está en absoluto con el procedimiento que para ello se prevé en esta ley.

Como ya han manifestado otros portavoces, tampoco a nosotros nos gusta el carácter ambiguo, indefinido, de muchos de los preceptos de este proyecto de ley, que de aprobarse tal cual está vendría a dar un cheque en blanco al Gobierno, con el agravante de que la remisión correspondiente se caracteriza como norma básica. Es preciso que aquello que tenga carácter básico quede perfectamente delimitado en la ley y que posteriormente pueda ser desarrollado por el Gobierno o las comunidades autónomas en función de sus respectivas competencias. Y a este respecto quisiera recordar al Grupo Popular que existe una sentencia del Tribunal Constitucional de 1986, que dice textualmente: Las normas básicas dictadas por el Estado en ejercicio de la competencia que le reserva la Constitución no pueden agotar la regulación de una materia. Fin de la frase. Y continúa, haciendo referencia a las competencias de las comunidades autónomas: Éstas —las comunidades autónomas—, en el ejercicio de su autonomía, pueden asentar su acción de gobierno en función de una política propia sobre esta materia. Fin de la frase.

A la vista de estos dos fragmentos de la citada sentencia del Tribunal Constitucional, habrá que acudir al recurso de amparo si este proyecto de ley no se modifica, ya que las comunidades autónomas con competencias en esta materia no pensamos en absoluto renunciar a hacer una política propia; no queremos exclusivamente hacer una política de gestión, como lamentable e incomprensiblemente dijo el Consejero de Murcia el lunes pasado. Ése no es el punto de vista de algunas comunidades autónomas, que repito queremos hacer una política educativa, porque podemos hacerlo, porque nos ampara la Constitución.

De manera sorpresiva y decepcionante este proyecto de ley parece desconocer la realidad del reparto competencial existente en materia educativa. A estas alturas de la historia es realmente preocupante que el Gobierno no pueda percibir que gran parte del progreso de España en estos 25 años de democracia se debe a la energía y el empuje de las comunidades autónomas, y tanto con esta ley como con otras —como también se ha indicado— se pretende laminar las competencias, restar empuje a las comunidades autónomas, que reitero han propiciado en gran parte la prosperidad de España. De este increíble intento o pretensión de laminar competencias son ejemplos la previsión de una red de centros de referencia nacional con implantación en todas las autonomías, o la reserva a favor del Gobierno de las funciones de los directores de esos centros. No estamos dispuestos a aceptar esa invasión total de las competencias autonómicas, que es una de las razones esenciales de nuestro veto.

Por otro lado, también nos decepciona y sorprende que no haya ninguna referencia al ámbito europeo, que ha de ser un ámbito natural para nuestro país, por lo que cualquier ley debe hacer ya una referencia al mismo.

Éstas son dos razones fundamentales para oponernos a este proyecto de ley.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Varela.

Para la defensa de la propuesta de veto número 7, del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Fernández Zanca.

El señor FERNÁNDEZ ZANCA: Gracias, señor Presidente.

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado el veto a este proyecto de ley porque consideramos que tiene graves deficiencias. Creemos que esta ley no está a la altura de la importancia que tiene, porque es mucho lo que está en juego. Es una ley que va a afectar a muchos millones de ciudadanos, habida cuenta que se refiere a la formación de todos, a la formación de los jóvenes en la formación profesional reglada, a los parados en la formación ocupacional y a los trabajadores en activo a través de la formación permanente.

A esta ley, lo mismo que hacen en otras —ya pasa a ser una constante—, se llega sin un diagnóstico previo. El Gobierno ha dicho de forma reiterada que esta ley es imprescindible por las deficiencias, por la ineficacia y hasta por el fracaso del II Programa Nacional de Formación Profesional que, por cierto, fue establecido por el Gobierno del señor Aznar en 1998. Por tanto, hemos de colocar en el haber del señor Aznar y su Gobierno este fracaso, porque es exclusiva responsabilidad suya. Sin embargo, al presentar este proyecto no se dice nada sobre cuáles son las deficiencias y dónde está el fracaso de este programa.

A pesar de que estamos hablando de un proyecto de ley cuyo objetivo es integrar los tres subsistemas de la formación profesional —reglada, ocupacional y continua—, nos encontramos con que no se define ninguno de ellos. No se habla de la formación profesional reglada, a la que sí se refiere el anteproyecto de otra ley, la de la supuesta calidad, que prevé, desde nuestro punto de vista, unos mecanismos que serán totalmente devastadores para la formación profesional ya que, por un lado, se crea un itinerario específico para la formación profesional y, por otro lado, a los alumnos que no promocionen en otros itinerarios se les va a derivar hacia programas de iniciación profesional, donde se incluirán componentes de formación básica y módulos de formación profesional. No creo que ésta sea la mejor fórmula para prestigiar la formación profesional.

También he de añadir que este proyecto de ley, como ya han dicho anteriores intervinientes, no es respetuoso con las comunidades autónomas. Señorías, ¿por qué ese intento de recuperar competencias de educación que el Gobierno ya ha transferido a comunidades autónomas? ¿Por qué es necesario crear una red nacional de centros de referencia nacional? ¿Cuál es la razón si todas las competencias en educación están transferidas a las comunidades autónomas?

Por lo que se refiere a la financiación, en la memoria económica que acompaña a la ley lo más notable que se dice es que sus objetivos no necesitan ninguna financiación adicional, cosa difícil de entender cuando estamos hablando de un proyecto de ley que tiene que contribuir al

desarrollo y expansión de la formación profesional, a mejorar su calidad y a dotar a los centros de más y mejores recursos. ¿Cómo es posible, señorías, que se diga que los recursos actuales son suficientes y que no es necesaria una financiación adicional? No sé si ésta es la idea del Partido Popular sobre la calidad.

Estamos en este trámite de debate de este proyecto de ley de las cualificaciones —dicho en el peor de los sentidos— y de la formación profesional, y la verdad es que tenemos muy pocas esperanzas, habida cuenta de que en la reunión de la Ponencia se ventiló en un par de minutos, por lo que creo que hay poco que esperar sobre la suerte que van a correr las enmiendas de la oposición; enmiendas que, a mi juicio, están orientadas a mejorar y a paliar las deficiencias y los errores que tiene este proyecto. Parece que dentro de esa estrategia que han de seguir las leyes educativas de pasar el rodillo de la mayoría absoluta estaremos en la situación de que no nos sea admitida ninguna enmienda, lo cual creo que es un error, porque como decía al principio es mucho lo que está en juego —es una ley que va a afectar a millones de ciudadanos.

En definitiva, el proyecto de ley es malo, con muchos defectos, no respeta las competencias de las comunidades autónomas, no prevé ni un euro de financiación, vuelve al «dedazo» para el nombramiento de los directores, en definitiva, no nos gusta el proyecto de ley y por ello el Grupo Parlamentario Socialista no va a apoyarlo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Fernández Zanca.

En turno en contra tiene la palabra la Senadora Do Campo, del Grupo Parlamentario Popular.

La señora DO CAMPO PIÑEIRO: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para posicionarnos con respecto a los siete vetos presentados por los diferentes grupos y anunciamos, en primer lugar, que los vamos a rechazar. También, desde el Grupo Popular, queremos agradecer el tono y las formas utilizadas por los diferentes grupos parlamentarios con respecto a la defensa de sus vetos y el posicionamiento contrario a esta ley.

Los vamos a rechazar porque consideramos que con este proyecto de ley se da solución a una serie de necesidades que tiene la formación profesional de hoy, y que creo que en eso todos estamos de acuerdo. Tenemos que reconocer que el sistema de formación profesional no está todavía a la altura de los sistemas europeos y, si bien hay datos que nos muestran una evolución positiva de la formación profesional en España en los últimos años, consideramos que es necesario seguir avanzando para situar estos estudios a la altura de Europa. Creo que algunos grupos parlamentarios así lo reconocen, e incluso viene reconocido también en algún veto.

Mientras que en la Unión Europea el 58 por ciento de los estudiantes de enseñanza secundaria no obligatoria siguen los estudios de formación profesional, en España

sólo lo hace un 41 por ciento. Y a esto le tenemos que añadir que en el mercado laboral también existen desajustes entre la cualificación de las personas y la demanda de trabajadores. Esto nos muestra la necesidad de un nuevo sistema que articule las ofertas formativas con la necesidad del mercado. Creo que este es el principal objetivo de este proyecto de ley.

La formación profesional actual en España no cuenta con un sistema integrado, sino que se imparte, como todos sabemos, por tres vías que son independientes. Se hace necesaria por tanto esa regulación del sistema tanto de convalidaciones como de correspondencias y equivalencias entre los tres subsistemas, incluyendo la experiencia laboral. Se hace necesario también poder diseñar ofertas y acciones formativas que permitan una constante renovación y adaptación de las competencias profesionales.

Se pretende, en consecuencia, configurar un sistema lo suficientemente flexible para que toda persona, sea cual sea su edad, esté siempre en condiciones de poder aprender y trabajar, adaptando para ello la formación profesional a la rápida evolución de las nuevas profesiones, con el objetivo de lograr esa mejor inserción laboral de las personas.

Esta ley también es necesaria, sobre todo, debido a las recomendaciones que desde los diferentes sectores del ámbito de la formación y del empleo se hacen con respecto a la necesidad de dotar al sistema de formación profesional de un adecuado nivel de flexibilidad, respondiendo con eficacia a las demandas de cualificación planteadas desde el sistema productivo y, desde luego, respondiendo a la necesidad de definir cuáles deben ser las cualificaciones con las establecidas en la Unión Europea.

Y a esto, señorías, responde el II Programa Nacional de Formación Profesional al que aquí se ha hecho referencia, que es la base en la que, lógicamente, se sustenta esta ley que hoy debatimos y que con su aprobación en 1998 ya eran diagnosticadas las directrices y los principios básicos en los que se debía inspirar.

Era diagnosticado no sólo por el Gobierno, no sólo por el Grupo Popular, sino también por las diferentes administraciones, por los agentes sociales que están presentes en el Consejo General de Formación Profesional, Consejo que, por cierto, en el año 1997 fue modificado para darle cabida como órgano no sólo de consulta, sino de participación a las comunidades autónomas, que hasta el momento no podían participar dentro de él.

Por lo tanto, a nuestro Grupo le parece más que oportuno este proyecto de ley por varias razones. En primer lugar, por relacionar directamente la formación con el empleo, creándose para ello el sistema nacional de cualificaciones profesionales, un catálogo de cualificaciones profesionales y un catálogo modular de formación profesional.

También nos parece oportuno por colaborar con el mundo empresarial para garantizar esa mejor formación y esas mayores posibilidades para el empleo que todos deseamos. Asimismo, facilita la movilidad de alumnos y trabajadores por todo el espacio de la Unión Europea. Nos parece igualmente oportuno porque, utilizando el catálogo de cualificaciones y su formación asociada, las diferentes administraciones podrán diseñar ofertas adaptadas a las

necesidades de las personas y a las de los grupos con especial dificultad de integración en el mercado laboral. Ahí debemos tener en cuenta a los mayores de 45 años, a las mujeres, a los trabajadores temporales, y en general a las personas que tienen esa dificultad de integración.

A pesar de las críticas que han vertido aquí los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios, en el Grupo Parlamentario Popular consideramos positivo que la ley establezca la existencia de esos centros para favorecer la integración de las tres ofertas de formación profesional, que serán, sin lugar a dudas, un referente para las empresas del entorno al tratarse de centros de prestigio y de referencia para el sector productivo, para los empleadores y para la sociedad en general, respetándose a la vez los centros ya implantados en diferentes Comunidades Autónomas. Reconocemos, por ejemplo, los centros ya establecidos en el País Vasco, pero eso no impide que se puedan crear estos centros integrados de referencia nacional, unos centros que nos facilitarán el trabajo de cara a tener una mayor y mejor formación.

Vemos también de modo positivo que la ley establezca una novedad: que aquellas personas que posean importantes competencias profesionales fruto de su propia experiencia profesional o de aprendizajes no formales y que en su día no hayan tenido la oportunidad de pasar por un centro de formación, puedan ver reconocidas sus competencias profesionales acreditadas mediante procedimientos objetivos gracias al catálogo de cualificaciones.

A pesar de lo dicho por diferentes representantes, he de dejar claro que la ley establece los ámbitos de participación de las administraciones y de los agentes sociales en el sistema nacional de formación profesional y cualificaciones. De esta forma queda claro y contemplado en el proyecto de ley, tanto en la exposición de motivos como incluso en las disposiciones, cuáles son los ámbitos de la Administración General del Estado, cuáles son las competencias de las administraciones de las comunidades autónomas y cuáles son los ámbitos en que pueden participar —cómo no— tanto empresas como otras entidades para cooperar junto a los agentes sociales y los poderes públicos en todo lo que serán las políticas formativas y de cualificación profesional.

Desde nuestro Grupo también consideramos positivo este proyecto de ley porque está creando un sistema de información importante, no ya sólo para los trabajadores sino también para los empleadores, para los alumnos y para las propias familias, a quienes va a garantizar la transparencia informativa. Este proyecto establece también un sistema de evaluación y de calidad externa que nos va a posibilitar la creación de ajustes y credibilidad del sistema nacional de cualificaciones profesionales. Con todo esto se facilitan y abren nuevas vías para desarrollar procesos de formación a lo largo de toda la vida que sin lugar a dudas nos conducirán a un mayor y mejor empleo.

Por todas estas razones, y partiendo además de la idea de cubrir esa demanda social, vamos a rechazar cada uno de estos siete vetos. Queremos destacar —se ha hecho referencia a ello por parte de algunos representantes— que ustedes nos han mostrado su preocupación respecto de las

competencias que usted, señoría, considera que la Administración General del Estado pretende controlar, pero nosotros tenemos que decirle que este Gobierno respeta la Constitución y las competencias de las comunidades autónomas, como no podía ser de otra manera. Por tanto, no podemos admitir sus afirmaciones en relación con esa obsesión centralizadora.

Si el señor Presidente me lo permite, voy a continuar haciendo referencia a determinadas afirmaciones que aquí se han hecho.

Quiero agradecerle su tono a la senadora De Boneta. Debo decirle que el Grupo Parlamentario Popular sí es receptivo, pero no podemos estar de acuerdo con las soluciones que ustedes pretenden darnos, independientemente de que consideremos que ustedes han hecho un trabajo importante al presentar ese texto alternativo que hemos estudiado pero que no podemos compartir. Ustedes intentan modificar el actual proyecto y nosotros consideramos que el artículo 1, referente a lo que es en sí la ley, responde con eficacia a las demandas sociales y económicas. Ustedes nos acusan de que este proyecto no responde a eso. Senadora De Boneta, usted también decía que lo único que se ha hecho en la tramitación en el Congreso ha sido el cambio del título y la referencia a los títulos. Con todo respeto debo decirle que deberá revisar las enmiendas que han sido aceptadas en ese trámite, entre ellas algunas transaccionales de grupos parlamentarios que también están presentes en esta Comisión, por ejemplo, Coalición Canaria.

Reiteramos el respeto a las competencias. Señoría, usted también hace referencia a que no hay un acercamiento a las políticas de la Unión Europea. Queda clara en la exposición de motivos la referencia que hacemos nosotros a la Unión Europea, e incluso en el artículo 8 también se hace referencia a la Comunidad Europea. En cuanto a las competencias, debo decirle que conocemos claramente cuáles tienen las administraciones autonómicas y cuáles tiene la Administración General. Viene detallado en las disposiciones adicionales qué es competencia exclusiva, que, como sabe usted muy bien, es todo aquello que conlleva el ámbito laboral. No nos olvidemos que éste no es un proyecto de ley únicamente de formación reglada, sino que es también de cualificaciones, como bien dice su título, que, por cierto, se debe a la aceptación de una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista en la tramitación del proyecto de ley en el Congreso de los Diputados. Es un proyecto de ley de cualificación y de formación profesional en la que se contienen claramente competencias de ámbito estatal. Por tanto, no estamos invadiendo ninguna competencia sino respetando ante todo la Constitución.

El portavoz del Grupo de la Entesa ha hecho referencia a una involución, a una uniformidad del sistema, a una invasión de competencias. En realidad ya le he dado respuesta a ello al responder a la Senadora De Boneta.

El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos hace referencia, como se recoge en su veto, a una falta de sensibilidad para con la organización territorial y el Estado autonómico. Nos hablan también de involución y quiero darles respuesta a eso. Nosotros tenemos

en cuenta, como lo tiene en cuenta el Gobierno, las peculiaridades de cada comunidad autónoma, por lo que se tendrán también en cuenta las aportaciones de las comunidades autónomas. Para eso tenemos un Consejo General de la Formación Profesional en el que están representadas las comunidades autónomas y en el que podrán hacer oír su voz y mostrar su posicionamiento respecto de todo aquello que se pueda articular y reglamentar. Por tanto, no podemos aceptar la opinión que su señoría nos traslada.

También ha hablado usted de la financiación. Con mi respuesta a este punto de su intervención también respondo al Senador socialista. Creo que todos sabemos que hay diferentes vías para la financiación de la formación y, no nos olvidemos, la formación reglada es competencia de la Administración autonómica. Las vías que tenemos de financiación son el Estado, que lo asumirá, las comunidades autónomas y los fondos europeos, que no debemos olvidar. Y, desde luego, si revisamos datos —no dispongo de ellos en este momento— podemos ver que ha habido y habrá sustento económico y financiero que respaldará las posibilidades de actuación en el campo de la formación profesional.

También nos decía el representante del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos que éste es un texto vago y que tenemos la obsesión nacional. Creo haberle dado respuesta a esto con mis contestaciones anteriores. Yo le recomiendo que se lea el artículo 8 del proyecto, en el que se hace referencia a la Unión Europea, y asimismo la exposición de motivos. Independientemente de que reconocemos la buena calidad de los centros que hay en el País Vasco —vuelvo a repetirlo—, nosotros vamos a seguir defendiendo esos centros de referencia nacional, que seguramente serán centros de prestigio, y que sin duda van a ayudar a nuestros alumnos, a nuestros trabajadores y desempleados a conseguir una mejor formación y por tanto un mejor empleo.

Senador Varela, muchas de las quejas que hace su señoría se centran en que parecemos desconocer el reparto competencial y en que laminamos de manera increíble las competencias. Así lo ha expresado usted aquí. Creo que esto ya está contestado, pero en cualquier caso le diré que nosotros no queremos laminar nada.

Hacía referencia a una sentencia del Tribunal Constitucional. Yo también puedo hacer referencia a otra donde se dice que la materia de la formación profesional ocupacional en su modalidad de formación continua de los trabajadores asalariados o en activo no pertenece al ámbito de la educación, como se intentaba considerar por parte de alguna comunidad autónoma. Por tanto, sentencias podemos utilizar todas. Lógicamente, nosotros respetamos que ustedes en un momento dado quieran acudir al Tribunal Constitucional pero también consideramos que nosotros estamos respetando la Constitución y a las comunidades autónomas, como no podía ser de otra manera.

Su señoría también hace la misma alusión respecto a la red de centros de referencia nacional, sobre lo que vuelvo a contestar lo mismo, así como al ámbito europeo, respecto a lo que la propia Ley, tanto en su artículo 8 como en su exposición de motivos, hace referencia clara a la normativa de la Unión Europea relativa al sistema general de recono-

cimiento de la formación profesional en los Estados miembros de la misma y demás Estados signatarios del acuerdo sobre el espacio económico europeo. Por tanto, explícitamente, tanto en la exposición de motivos como en su artículo 8, queda claramente explicado.

Para finalizar, contestando al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, que considera que hay graves deficiencias y que ha habido un fracaso del programa nacional, tenemos que recordar que uno de los principales objetivos de los interlocutores sociales y de las comunidades autónomas era que esta Ley se pudiese desarrollar. Claramente se veía cuál era la evolución de la formación profesional en España y la necesidad de que se regulase algo nuevo y teníamos el apoyo consensuado no sólo de las comunidades autónomas sino también de los interlocutores sociales, empresarios y sindicatos.

Ha hecho referencia a un aspecto sobre el que yo no deseaba entrar, pero, lógicamente, ahora tengo que hacerlo. Ha dicho usted que en el trámite de Ponencia las enmiendas fueron ventiladas en pocos minutos. Usted sabe cómo fue el trámite en ponencia. Creo que quedó explícito cómo había sido la convocatoria de dicha Ponencia y cuál era nuestro posicionamiento en ese momento. Dijimos que nos reservábamos el debate para Comisión pero tampoco ningún grupo quiso defender entonces sus enmiendas y no vi que en ningún momento pidiera la palabra para poder defender entonces sus argumentos. En ese caso, lógicamente tendríamos que haber contestado.

Se ha referido también al tema de la financiación, cuestión que ya ha sido contestada.

Para finalizar, dice usted que tiene pocas esperanzas. Lógicamente, como Grupo que apoya al Gobierno, nosotros tenemos muchas esperanzas en este proyecto de ley y espero que esas mismas esperanzas también las tengan los estudiantes, los trabajadores y los parados de este país.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora senadora.

Nos hemos comprometido a votar a las doce y, siguiendo el procedimiento procesal, hay que votar los vetos previamente al debate de las enmiendas, entre otras cosas, porque si prosperase algún veto ya no sería caso seguir adelante. Por tanto, como son las doce menos cinco, tienen cinco minutos de asueto. *(Pausa.)*

Señorías antes de pasar a la votación, ruego pasen a la Mesa los nombres de los señores senadores que van a ser sustituidos. *(Pausa.)*

En primer lugar, vamos a votar la propuesta de veto número 1 de don Manuel Cámara Fernández y don José Cabrero Palomares del Grupo Parlamentario Mixto.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, siete; en contra, 13; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 2 de don Anxo Manuel Quintana González del Grupo Parlamentario Mixto.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, siete; en contra, 13; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 3 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, siete; en contra, 13; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 4 de doña Inmaculada de Boneta y Piedra del Grupo Parlamentario Mixto.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, siete; en contra, 13; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la propuesta.

Votamos la propuesta de veto número 5 del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, siete; en contra, 13; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 6 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, ocho; en contra, 13; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Finalmente votamos la propuesta de veto número 7 del Grupo Parlamentario Socialista.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 7; en contra, 13; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Muchas gracias, señorías.

Pasamos al debate de las enmiendas al proyecto de ley. Había varias propuestas de debate: una por títulos y otra globalmente. Los señores senadores que intervengan por cualquier grupo, más de uno, se dividirán el tiempo con la generosidad que, dada esta ordenación del debate, concederá naturalmente la Presidencia en este caso.

¿Les parece bien esta última la propuesta en el sentido de que se haga globalmente la defensa de las enmiendas a los títulos, incluyendo las disposiciones adicionales y finales y exposición de motivos? *(Pausa.)*

Están de acuerdo todos. Compruebo que sus señorías tienen una gran agilidad gimnástica.

La senadora De Boneta tiene la palabra por una cuestión de orden.

La señora DE BONETA Y PIEDRA: Señor Presidente, por razones de pluriempleo y por tener que acudir a otra Comisión, querría saber a qué hora va a ser la votación de las enmiendas.

El señor PRESIDENTE: Dado que la ordenación del debate ha cambiado, la Presidencia tiene que ser generosa puesto que vamos a conseguir un gran ahorro de tiempo y, aunque me considero incapaz de calcular cuándo será la votación, creo que podrá ser dentro de una hora; o sea, son las doce horas y diez minutos y, con el objeto de que puedan moverse sus señorías para otros menesteres de Comisión, votaremos a la una y cuarto. Advierto a los señores y señoras portavoces que después se reunirá la Mesa y Portavoces de la Comisión para tratar temas pendientes.

A continuación, tiene la palabra la senadora De Boneta a los efectos de defender las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto.

La señora DE BONETA Y PIEDRA: Muchas gracias, señor Presidente.

Voy a darle una nueva prueba de flexibilidad y una nueva alegría, señor Presidente, porque, en este caso, me hago cargo de las enmiendas números 1 a 142.

Las enmiendas que van de la 1 a la 49, ambas inclusive, han sido formuladas por los senadores de Izquierda Unida, los señores Cámara y Cabrero, del Grupo Parlamentario Mixto. Las números 49 a 85, ambas inclusive, corresponden al senador Anxo Quintana, del BNG. Y las que van de la 127 a la 142, ambas inclusive, son las que formula esta senadora de Eusko Alkartasuna, del Grupo Parlamentario Mixto. Doy por defendidas, por supuesto, las enmiendas de mis compañeros de grupo.

Quiero hacer saber al señor Presidente que, teniendo en cuenta que ya he apuntado los planteamientos generales que se recogen en las propias enmiendas, sería prolijo volver a discutir sobre cómo debe organizarse un sistema de cualificaciones integral en la Formación Profesional, máxime cuando existe una distribución competencial y dado el alcance de la formación, que no está limitada ni por el dónde, ni por el para ni por el durante.

En este caso, se están utilizando otros aspectos de la actividad política, como son las cuestiones laborales, para intervenir en las competencias que tienen atribuidas en exclusiva las comunidades autónomas en materia de educación. Eso es lo que ha hecho el Gobierno central en un esfuerzo centralizador. Ya ha hecho referencia a este tema la representante del Partido Popular, al hablar de la no invasión de competencias y de las sentencias del Tribunal Constitucional existentes al respecto, pero considero conveniente volver a ponerlo sobre la mesa.

No obstante, creo que ya tendremos tiempo de referirnos a las enmiendas que se refieren a la defensa de la competencia en el debate del Pleno. Por ello y porque tengo que asistir a otra Comisión, voy a dar por defendidas todas las enmiendas a efectos de la votación y haré las precisiones oportunas en el Pleno. A mi juicio, ante un auténtico proyecto alternativo, el debate político debe reservarse para el veto.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Boneta. Sepa que hemos decidido que la votación sea a las trece horas y quince minutos.

En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra para la defensa de sus enmiendas el senador Acosta.

El señor ACOSTA PADRÓN: Muchas gracias, señor Presidente.

Desde el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria entendemos la necesidad de este proyecto de ley orgánica de las cualificaciones y de la formación profesional.

Creemos que el sistema formativo profesional ha de adaptarse a las necesidades que demanda la sociedad y en este momento, cuando se está produciendo un especial cambio en el mercado laboral con las nuevas tecnologías, procede una ley de cualificación profesional.

En cuanto a la ley que presenta el Gobierno, hay una serie de aspectos que, lógicamente, compartimos y con los que estamos de acuerdo, pero en cambio discrepamos con otros y en base a ello hemos presentado una serie de enmiendas.

Compartimos el carácter integrador que de la formación se manifiesta en la ley, pero hay un aspecto en el que no coincidimos, y me refiero a que en la ley se hace referencia a su desarrollo reglamentario. Dicho desarrollo reglamentario se recoge en el texto porque se fija una parte exclusiva para el Estado, con lo cual entendemos que las Comunidades Autónomas, como parte importante en el desarrollo de esta ley, deben participar más en estos reglamentos.

Por otra parte, entendemos que para evitar todo esto no se puede estar judicializando estos procesos legislativos y que son las Comunidades Autónomas las que en buena parte han de poner en marcha el proceso y que, por tanto, deben participar activamente en el desarrollo de los reglamentos.

En cuanto a la defensa de las enmiendas, como están justificadas, las voy a dar por defendidas en este momento. Antes de finalizar, quiero disculparme ante la Comisión porque me tengo que ausentar.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Acosta.

Para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el señor Bildarratz.

El señor BILDARRATZ SORRON. Muchas gracias, señor Presidente.

Intentaré no alargarme demasiado. Muchas de nuestras enmiendas —y luego explicaré alguna— son de lo más inocentes, puesto que lo único que persiguen es intentar dotar de mayor calidad el texto que se nos presenta. No obstante, nos permitirán comprobar qué actitud adoptan los miembros del Partido Popular ante las mismas.

Empezando por las formuladas a la exposición de motivos, únicamente voy a señalar dos. En la primera se hace una especie de reconocimiento a la situación anterior, desde el punto de vista del ordenamiento jurídico, y estimamos que no se reconoce la labor de las comunidades autónomas. Por tanto, en la justificación de la misma se ex-

plica que pretende introducir ese reconocimiento integrador de los esfuerzos desarrollados en diferentes comunidades autónomas, que han servido de base para los trabajos del Consejo General de Formación Profesional.

La enmienda 104 también se formula a la exposición de motivos y pretende única y exclusivamente clarificar la finalidad de este proyecto de ley, que, a nuestro entender, no se corresponde con el texto. La finalidad no es la creación de un sistema nacional de cualificaciones profesionales sino que estimamos, por coherencia con el texto, que sería la ordenación de un sistema integral de Formación Profesional.

Pasando al artículo 1, que es la finalidad de la ley, introducimos unos términos en base a lo que nosotros entendemos que es el respeto a la distribución territorial de competencias, que, en nuestra opinión, tiene que quedar plasmado en la definición del objeto de la ley en la medida en que propugnamos que el sistema objeto de ordenación debe constituirse mediante la integración coordinada de sistemas territoriales.

Estimamos que también es clave la enmienda número 107, formulada al artículo 2, relativo a los principios del sistema nacional de cualificaciones profesionales. El objetivo debe ser dotar del sentido territorial que debe tener a la configuración del sistema, según el orden constitucional, mediante la expresión del mismo como la suma de los sistemas autonómicos. Después añade una serie de correcciones técnicas.

La enmienda número 108 la califico de inocente porque lo único que ambiciona es corregir y dotar del sentido completo la referencia a las expectativas personales en relación con la oferta formativa, dado que la realidad demuestra inequívocamente que en muchos casos se persiguen expectativas personales de integración social. Añadimos este concepto de integración social mediante esta enmienda.

La enmienda 109 se refiere también a un elemento clave, cual es el catálogo nacional de cualificaciones profesionales. Su justificación se basa en que el sistema nacional de formación profesional y cualificaciones, tal y como hemos propugnado en nuestra anterior enmienda, se compone de los diferentes sistema autonómicos que, a su vez, disponen de los correspondientes catálogos. Se incorpora al conjunto de instrumentos el sistema de títulos de formación profesional, dado que constituye el último y más acabado referente del que derivan los máximos efectos jurídicos, académicos y profesionales para toda la formación profesional y para el marco educativo concebido con criterio de integralidad.

Dentro de la enmienda número 110, sobre organización del sistema nacional de cualificaciones profesionales, estimamos el argumento que una y otra vez hemos comentado en cuanto a que las comunidades autónomas competentes, así como los agentes sociales, tienen que tomar parte en este objetivo.

Con la enmienda número 111 se varía por completo el esquema centralizado de gestión y decisión que propone el proyecto, pues entendemos que deben ser las Comunidades Autónomas, en ejercicio de sus potestades normativas

y ejecutivas, quienes realmente alimenten, tras valorar la realidad de su respectivo tejido productivo, lo necesario para la determinación por el Gobierno de un catálogo nacional de cualificaciones profesionales que, por otra parte, no debiera definir toda la formación asociada posible, sino únicamente los contenidos mínimos modulares. El resultado es un modelo mucho más realista, participativo y acorde con el reparto constitucional de competencias.

La enmienda número 114, correspondiente al artículo 11 sobre centros integrados de formación profesional, propone un nuevo planteamiento cuyo objetivo sería ordenar unos contenidos abiertos y flexibles que no restrinjan los esquemas de gestión que cada Administración autonómica desee implantar en relación con la búsqueda de niveles de excelencia de los recursos y, sobre todo, suprimir la previsión referente a la habilitación a la Administración del Estado para que pueda crear y sostener centros en territorio de las comunidades autónomas y generar así una dualidad de redes en el Estado.

La enmienda número 117, relativa a la evaluación y coordinación del sistema, está motivada al entender que la evaluación es una función ejecutiva asignada a las comunidades autónomas, por lo que resulta palmariamente inconstitucional que se atribuya al Gobierno, en el apartado 1 del artículo 17 del proyecto, el establecimiento de los procesos de evaluación.

La enmienda 121, de adición a la disposición adicional, sobre reversibilidad y comunicabilidad de los itinerarios formativos, pone de manifiesto algo en nuestra opinión muy importante, como es regular las garantías de reversibilidad y comunicabilidad de todos los itinerarios formativos como garantías que emanan del desarrollo de un aspecto esencial en el ejercicio del derecho fundamental a la educación y que debe constituir un mandato a todos los poderes públicos, y en particular a propio Estado cuando regula las condiciones de obtención y homologación de títulos. Dichas garantías, que se concretarán en las llamadas pasarelas entre los distintos niveles y modalidades de enseñanza, constituyen hoy una necesidad de primera magnitud en orden a dignificar la formación profesional y poder elaborar una nueva política integral de la misma.

Tal y como hemos comentado a la hora de defender los vetos, y para finalizar, no quisiera dejar de referirme al tema de la financiación. En nuestra opinión, deberíamos articular las bases mínimas para que exista un planteamiento financiero de referencia que respalde la reforma de la formación profesional, cuestión ésta respecto de la que se consideran imprescindibles dos claros mandatos: que se unifiquen las fuentes de financiación por la que se soporta hoy en día la formación profesional, pues de lo contrario sería una auténtica entelequia el objetivo integrador que propugna la ley, y que se promuevan políticas económicas fiscales o tributarias que, siguiendo asimismo los modelos de muchos de los países de la Unión Europea, incentiven eficazmente la implicación de la empresa en la inversión en formación profesional.

Son más las enmiendas presentadas, pero considero que la defensa realizada dibuja el espíritu que preside el resto de ellas, referidas unas a mejoras técnicas, otras al ámbito

competencial y otras que entendemos mejoran el proyecto. Confío en que estas enmiendas tengan un poco de suerte, aunque no pretendo que se acepten 24 de las 25 presentadas; me conformaría con que se aceptasen 19.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Bildarratz. Quien no lo espera todo nunca recibe todo; estamos de acuerdo con usted, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, y para defender sus enmiendas, tiene la palabra el Senador Sabaté.

El señor SABATÉ BORRÀS: Gracias, señor Presidente.

Señorías, en primer lugar quisiera disculparme por haber tenido que ausentarme por una cuestión urgente y no haber podido participar en la votación de los vetos.

Intervengo en nombre de mi Grupo para manifestar que mantendremos las enmiendas para el Pleno sobre la base de la argumentación expuesta en el texto de las mismas, así como la esgrimida en la defensa del veto; una argumentación y una línea de enmiendas que se basan en la necesidad de una ley orgánica de cualificaciones y formación profesional que realmente sea incentivadora de la oferta, que cuente con la participación de las distintas administraciones y agentes, fomentando la participación, sobre todo en las instituciones, de manera descentralizada, y que permita que la oferta de formación profesional responda a las necesidades del mercado y del entorno socio-económico. Ésta es, de alguna forma, la argumentación básica que desarrolla el conjunto de las enmiendas presentadas y que defenderemos ante el Pleno.

Gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Sabaté.

Para defender las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió tiene la palabra el senador Varela.

El señor VARELA I SERRA: Gracias, señor Presidente.

Pretendo ser tan breve como lo ha sido el senador Sabaté, y a diferencia del senador Bildarratz, lo espero todo; espero que las 30 enmiendas sean aceptadas, aunque tengo ciertas dudas al respecto.

Las 30 enmiendas que presenta nuestro grupo se sustentan básicamente en los motivos expuestos en la defensa del veto. Son motivos esencialmente competenciales y de mayor operatividad en relación con quien tiene contacto con los centros y con la realidad social y económica de cada autonomía; asimismo, hemos presentado alguna enmienda relacionada con dotar de un mayor peso a los ayuntamientos. Sin embargo, y como ya he dicho, los motivos esenciales que sustentan esas 30 enmiendas se han expuesto ya en el trámite parlamentario de defensa de los vetos, motivo éste por el que las doy por defendidas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Varela. Tal y como decía don Miguel de Unamuno, está bien esperar todo, pero tampoco está mal practicar la duda.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la senadora Pérez Anguita.

La señora PÉREZ ANGUIA: Muchas gracias, señor Presidente.

En nombre de mi Grupo voy a dar por defendida las 27 enmiendas que presentamos. No obstante, me gustaría hacer hincapié en tres de ellas: la enmienda referida a la exposición de motivos, así como las números 222 y la 224.

El Grupo Parlamentario Socialista presenta un bloque de enmiendas al proyecto de ley que hoy debatimos en la Comisión de Educación, Cultura y Deporte coherente con un modelo diferente de formación profesional y acorde con el también diferente planteamiento del Partido Socialista ante la misma.

La enmienda relativa a la exposición de motivos, junto con las números 208, 211, 216, 219 y disposición final segunda, corresponden a este bloque al que hago alusión. Entendemos que los cambios que se están produciendo en la economía, en las nuevas y renovadas tecnologías y en la sociedad en general, así como la evolución de los sectores productivos para dar respuesta a esos cambios, hacen que la formación profesional necesite adecuarse, estructurarse y organizarse de forma más flexible.

La formación profesional constituye un elemento decisivo para facilitar a las personas el ingreso, el mantenimiento y la progresión en el mercado laboral.

Entiende el PSOE que el Gobierno no sólo no ha tenido en cuenta estas consideraciones y otras muchas a las que no aludo por no cansar a sus señorías, sino que lo que nos ha presentado en el proyecto que hoy debatimos es una reproducción de los enunciados y objetivos que fueron aprobados por el Gobierno hace cuatro años en el II Plan Nacional de Formación Profesional que no se ha cumplido.

En el proyecto no se establecen garantías ni plazos ni compromisos de que se vaya a cumplir la ley. Desde esta perspectiva, se puede decir que es una ley irresponsable.

El proyecto, entendemos nosotros, pasa de puntillas por las cuestiones que en relación con la formación profesional se están abordando actualmente en los foros institucionales de la Unión Europea. Países como Reino Unido, Irlanda, Holanda y Finlandia han diseñado un nuevo modelo de formación profesional flexible adaptado a las necesidades actuales y amparado en leyes recientes avanzadas en su concepción participativa y descentralizada.

Con respecto a la enmienda número 222, consideramos que el término equivalencia crea una confusión que tiene efectos muy graves para el sistema. Confunde los títulos que tienen carácter académico con los certificados que acreditan competencia profesional. Por ello creemos que es necesaria la supresión del término equivalencia. Ése es el sentido de la enmienda número 222.

Por último, con la enmienda número 224 a la disposición adicional sexta reflejamos la necesidad de incluir previsiones financieras para garantizar los recursos necesarios

que posibiliten alcanzar los objetivos perseguidos por la ley.

Consideramos que la futura ley va a ser totalmente cíclica con la formación profesional, no incluye ni un solo euro para ella. Los países de la Unión Europea aportan como media a la formación profesional el 6 por ciento del producto interior bruto. Nosotros pedimos que, en un plazo de cinco años, nos igualem a la media europea, lo que valoramos en torno a unos 18.000 euros.

Ustedes saben que una ley sin financiación es una ley inútil. Yo le diría a la señora Do Campo, en cuyo turno en contra ha hecho alusión a la financiación alegando que ésta pueda venir por distintas vías, que, efectivamente, puede venir por distintas vías, pero ya estamos acostumbrados a que desde el Gobierno central se legisle y a que después se diga a las comunidades autónomas que paguen. Nos tememos que con esta ley va a ocurrir exactamente igual.

Yo, como ha indicado el señor Presidente, espero todo. Pero, señor Presidente, después de lo que ha llovido, entiendo que sería una ilusión por mi parte pensar que van a aceptar las 27 enmiendas. Me contentaría con que se aprobaran algunas sustanciales.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Pérez Anguita.

Para fijar su posición respecto a las enmiendas, seguidamente intervendrá el Grupo Parlamentario Popular. senadora Do Campo, ¿cómo se van a dividir ustedes el tiempo?

La señora DO CAMPO PIÑEIRO: Muchas gracias, señor Presidente.

Nos vamos a dividir el tiempo entre la senadora Novillo y la senadora González. Yo rechazaré y me posicionaré respecto a las enmiendas del título preliminar y el título I; la senadora Novillo con respecto a los títulos II, III y IV y la senadora González con respecto a las disposiciones y la exposición de motivos.

El señor PRESIDENTE: Convendría que quedara claro, a efectos de las votaciones, las enmiendas que van a aceptar o la posición que van adoptar.

Tiene la palabra la senadora Do Campo.

La señora DO CAMPO PIÑEIRO: Muchas gracias, señor Presidente.

Con respecto a las enmiendas de Izquierda Unida y del Bloque Nacionalista Galego, que dio por defendidas la senadora De Boneta, las vamos a rechazar en los mismos términos.

La senadora De Boneta, en las enmiendas presentadas al título I, vuelve a hacer referencia a lo que ya hemos discutido en el trámite del debate del veto, a la centralización, a la invasión de competencias y se reserva para el trámite de Pleno la argumentación de estos conceptos. Nosotros también nos reservamos para dicho trámite la exposición de nuestros argumentos en contra de su aceptación.

Con respecto al senador del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, agradecemos que valoren la necesidad de este proyecto que, como bien ha dicho, está adaptado a las necesidades. Considera asimismo positivo el carácter integrador del proyecto de ley, que también agradecemos, y no podemos compartir su posicionamiento con respecto a lo que pueda ser con posterioridad el desarrollo reglamentario de la ley.

Por lo tanto, en principio, las enmiendas presentadas, que en muchos de los casos se refieren a las competencias de las comunidades autónomas, también las vamos a dar por rechazadas en este trámite de Comisión.

Con respecto al senador del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, se ha detenido en algunas de las enmiendas que hacen referencia al título preliminar y título I, en cuanto a la finalidad de la ley, en donde incorporan algo novedoso. Nosotros volvemos a reiterar que somos respetuosos con las competencias y, por lo tanto, consideramos que no hay que hacer ninguna modificación en cuanto a la finalidad de la ley.

Respecto a la enmienda número 118, respondemos que en el artículo 12 del propio proyecto ya está recogido lo que ustedes proponen, por lo que no lo consideramos oportuno.

Con respecto a la enmienda número 111, relativa al título I, volvemos otra vez a hablar de las competencias y contesto con la misma respuesta que formulé en el veto, no hay invasión de competencias por parte del Gobierno central sino que somos respetuosos con las competencias que en materia educativa tienen las comunidades autónomas. Lógicamente queremos dejar claro que todo lo que depende del sistema productivo es competencia exclusiva del Estado.

El senador del Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés mantiene sus enmiendas y nosotros las vamos a rechazar argumentando los mismos criterios alegados en el voto en contra del veto. Señala que sus enmiendas responden a las necesidades del entorno económico. Nosotros consideramos que nuestro proyecto de ley responde suficientemente a esas necesidades.

Con respecto al senador Varela, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, no ha hecho una defensa explícita de ninguna de las enmiendas, considerando que los temas que pueden afectar a estos títulos preliminar y título I ya han sido tratados en el debate del veto.

En cuanto a la senadora del Grupo Parlamentario Socialista, aunque no ha explicitado en ningún momento ninguna enmienda relativa al título preliminar y título I, por alusiones con respecto al tema de la financiación tengo que decirle que espero en el trámite de Pleno darle datos suficientes para que pueda variar el concepto que tiene respecto a la financiación que, vuelvo decir, viene por las tres vías, por la vía de la Administración autonómica, de la central y, cómo no, de Europa.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Do Campo. Tiene la palabra la senadora Novillo.

La señora NOVILLO MORENO: Gracias, señor Presidente.

Siguiendo la misma tónica que están llevando mis compañeros y predecesores en el uso de la palabra, seré también muy escueta porque ya se han tratado globalmente las enmiendas. Ateniéndome a los títulos II, III y IV del presente proyecto de ley, sólo voy argumentar, de forma global, que consideramos que desarrolla de una forma muy adecuada la mejora de los niveles de profesionalización, la polivalencia y mejora de las competencias en pro de un incremento de la empleabilidad, dando respuesta a las exigencias y posibilidades de empleo ofrecidas por las empresas, teniendo en cuenta la innovación, la inserción laboral y la coordinación de acciones formativas en los centros.

Me detendré explícitamente para contestar al senador del Partido Nacionalista Vasco que hacía referencia a la enmienda número 114; enmienda que vamos a rechazar porque, aunque tiene una similitud con Eusko Alkartasuna y CiU, de forma más escueta establece unas diferencias y propone un modelo que anula el artículo 149.1.7ª de la Constitución.

Dicho senador también se ha referido a la enmienda número 117 sobre la evaluación del sistema. De forma global, quiero manifestar que con las enmiendas a estos artículos se propone eliminar la potestad del establecimiento de los procesos de evaluación por parte del Gobierno, dejando sólo la función de coordinación, y también se propone eliminar la capacidad reglamentaria. Obviamente, sabemos que la evaluación del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional deberá ser reglamentada y definida por el Gobierno, aunque lógicamente dicho sistema será ejecutado en lo que compete por las comunidades autónomas.

Consideramos que es necesario definir unos indicadores a nivel nacional, porque si se deja que cada comunidad autónoma establezca sus propios indicadores y procedimientos éstos no permitirían una valoración coherente ni homogénea a nivel nacional.

Para terminar, como ha manifestado mi compañera, he de decir que en el Pleno se explicará de forma más exhaustiva nuestra postura en relación con las diferentes enmiendas de los restantes grupos parlamentarios.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Novillo. Tiene la palabra la senadora González Rodríguez.

La señora GONZÁLEZ RODRÍGUEZ: Gracias, señor Presidente.

Señorías, me ha tocado intervenir en último lugar, y voy a hacerlo con brevedad ya que, tal como ustedes han considerado, es oportuno debatir esta cuestión con profundidad en el Pleno en el que se tratarán una por una las enmiendas presentadas.

Se ha hecho hincapié en que este proyecto de ley no es participativo y que se excluye a las comunidades autónomas. Ésta ha sido la base principal del debate. Como ustedes saben, dicho proyecto no ha nacido sin padre y parte

del II Programa Nacional de Formación Profesional y del anterior.

El Gobierno del Partido Popular ha demostrado un afán constante por mejorar y actualizar todas las necesidades de planificación de la sociedad, adaptándola y equiparándola a la igualdad existente no sólo en nuestro país sino más allá de nuestras fronteras, ya que éstas no son las que teníamos con anterioridad; ahora tenemos un campo mucho más amplio de actuación, con más movilidad y donde nuestros trabajadores y trabajadoras pueden desarrollarse con un cien por cien de calidad de vida.

Hay que recordar algo bastante importante sobre este proyecto de ley. En el año 1997 el Partido Popular, con su apuesta de participación, integró en el Consejo General de Formación Profesional a las comunidades autónomas y ésta es una realidad que se ha tenido en cuenta para elaborar la ley. Fue un gran paso de participación e integración.

No obstante, en alguna intervención de la oposición en defensa de sus enmiendas se ha dicho que no se ha contado con el Consejo, que no hay participación, y he de decir que en este ámbito y a lo largo de todo el reglamento del proyecto de ley se ha tenido en cuenta a todos los agentes sociales, a las empresas, etcétera, y en este momento se puede decir que la participación y el consenso en muchos casos han sido los máximos.

Quiero recordar que este proyecto de ley respeta el artículo 27 de la Constitución, así como otros artículos que hacen referencia a las competencias de las juntas autonómicas. En una ley de estas características que no sólo es educativa sino también laboral es importante la máxima participación de todos aquellos agentes que en un momento dado han de aportar y suplir las ideas necesarias para que, en beneficio de los trabajadores, se consiga la coherencia constante y que el futuro sea mucho mejor que el que tenemos en la actualidad, así como que la preparación base de su trabajo sea la suficiente y adecuada para todos.

Como bien han dicho, ustedes confían en la aceptación de sus distintas enmiendas y puedo decirles que mi grupo va a rechazar tanto las presentadas a la exposición de motivos como a las disposiciones adicionales pero, en esa misma línea, todos —también el Grupo Parlamentario Popular— esperamos que acepten este proyecto de ley porque lo consideramos básico, importante y primordial a fin de que la sociedad en general pueda avanzar.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Visto para sentencia, como se dice.

Una vez concluido el debate, debemos suspender la sesión hasta las trece horas y quince minutos, hora en la que, como hemos dicho anteriormente, se procederá a la votación.

Queda claro que lo que se va a votar es el informe que se convertirá en dictamen, con lo cual sólo se incorporarían al informe o al dictamen las enmiendas que hubieran sido aceptadas. Las restantes quedan vivas, si sus señorías así lo estiman, para el Pleno. (*El señor Fernández Zanca pide la palabra.*)

El señor Fernández Zanca tiene la palabra.

El señor FERNÁNDEZ ZANCA: Señor Presidente, el senador Varela ha dicho, y yo le apoyo, que podríamos celebrar en este momento la reunión de la Mesa y Junta de Portavoces.

El señor PRESIDENTE: Me parece muy oportuno, pero creo que no están presentes todos los portavoces.

De momento, se suspende la sesión. *(Pausa.)*

Señorías, se reanuda la sesión.

Vamos a proceder a las votaciones pertinentes. *(El señor Barahona Hortelano pide la palabra.)*

Tiene la palabra el señor Barahona.

El señor BARAHONA HORTELANO: Gracias, señor Presidente.

Intervengo para advertir que el senador Sopena sustituye al senador Alberto Terán.

El señor PRESIDENTE: ¿Pero no se trata de una sustitución de una sustitución?

El señor BARAHONA HORTELANO: No. No había sido sustituido.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

— MOCIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA EMISIÓN DE UN SELLO CONMEMORATIVO DEL OCTAVO CENTENARIO DEL INICIO DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEO VIEJA, EN LLEIDA (661/000181).

El señor PRESIDENTE: Vamos a votar primero una moción que ya debatimos y cuya votación, como recordarán sus señorías, quedó pendiente. Se trata de la moción 661/000181, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por la que se insta al Gobierno a la emisión de un sello conmemorativo del octavo centenario del inicio de las obras de construcción de la Seo Vieja, en Lleida.

Efectuada la votación, fue aprobada por unanimidad.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.

Felicitemos al senador Varela, ilustre representante de Lleida, cuya circunscripción contará con un nuevo sello de correos. La Seo se lo merece tanto como el senador Varela.

— DICTAMINAR EL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE LAS CUALIFICACIONES Y DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL (621/000065) (Continuación).

El señor PRESIDENTE: Pasamos a votar el informe, que se convertirá en dictamen, del proyecto de ley orgánica de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.

Como ustedes saben perfectamente, votamos el texto del informe al cual se incorporarían, en su caso, las enmiendas que hubieran sido aceptadas. Si es reglamentario, votaremos de una sola vez el texto del informe, incluidos los títulos, las disposiciones adicionales y finales y la exposición de motivos. *(Pausa.)*

Lo es. Por lo tanto, votamos el informe.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 14; en contra, nueve.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

El dictamen pasará su trámite correspondiente en el Pleno.

Muchas gracias, señorías. Si no hay ninguna cuestión que quieran plantear, se levanta la sesión.

Eran las trece horas y quince minutos.

CORRECCIÓN DE ERRORES: En el «Diario de Sesiones» número 250, correspondiente a la sesión del jueves, 14 de marzo de 2002, en la página 39, la intervención del señor Fernández Zanca comienza: «Gracias, señor Presidente.

Profesor Molins, muchas gracias por estar aquí.

Se trata de una comparecencia que, como ya dije en la del profesor Montero, me parece excesiva a todas luces porque, ¿qué objetivo tienen estas comparecencias? No sé si alguien me lo podrá explicar.»